TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

MEDIO DE IMPUGNACIÓN.
TESLP/RR/47/2015.

RECURRENTE. Licenciado Alejandro Colunga Luna, en su carácter de Representante Legal del Partido Acción Nacional.

AUTORIDAD RESPONSABLE. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

TERCERO INTERESADO. En el presente asunto no compareció persona alguna con tal carácter.

MAGISTRADO PONENTE. Licenciado Oskar Kalixto Sánchez.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA. Licenciada María Concepción Castro Martínez.

San Luis Potosí, S. L. P., 21 veintiuno de mayo de 2015 dos mil quince.

V I S T O, para resolver el Recurso de Revisión TESLP/RR/47/2015, promovido por el recurrente al rubro citado, mediante el que impugna:

“el acuerdo de 22 de abril de 2015, relativo al expediente PSMF-01/20015, notificado por medio de oficio CEEPC/CPF/1088/2015, notificado el día 29 de abril de 2015, en el cual inicia Oficiosamente el Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas en contra del Partido Acción Nacional.”

G L O S A R I O

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma Político Electoral el 11 de febrero de 2014.

Constitución local. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Ley Electoral. Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, vigente en el año 2011.

Ley de Justicia Electoral. Ley de Justicia Electoral para el Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 30 de junio de 2014.

LGSIMIME. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

LEGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CEEPAC. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el actor hace en su escrito de demanda, así como de las constancias de autos, se advierte lo siguiente:

a) Aprobación del dictamen. En sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por acuerdo número 298/11/12, aprobó por mayoría de votos el dictamen que presentó la Comisión Permanente de Fiscalización, respecto de los informes presentados por los Partidos Políticos acreditados ante ese Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativos al gasto

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

ordinario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, entre ellos el correspondiente al Partido Acción Nacional.

b) Acta trigésima quinta de la Comisión Permanente de Fiscalización. Con fecha 07 de octubre de 2013, en sesión ordinaria los integrantes de la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Electoral, aprobaron en la citada Acta el análisis de las infracciones detectadas al Partido Acción Nacional de la revisión a los informes financieros presentados por dicho partido durante el ejercicio 2011, por la comisión de conductas infractoras que constituyen presuntas violaciones a la normatividad electoral de origen y aplicación de recursos.

c) Solicitud de inicio oficioso. Como consecuencia de la deliberación de dicho punto, en la misma fecha 07 de octubre de 2013, se emitió el acuerdo 167-10/2013, que determinó que con motivo de los hechos contenidos en el informe de la Unidad de Fiscalización, se solicitaba el inicio oficioso del Procedimiento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Estatales en contra del Partido Acción Nacional, por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Electoral del Estado del año 2011 y del Reglamento en la materia.

d) Aprobación de inicio oficioso. Con fecha 16 de enero de 2015, en sesión ordinaria el Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó por unanimidad de votos el Acta de la Trigésima Quinta Sesión de la Comisión Permanente de Fiscalización, de fecha 07 de octubre de 2013, misma que derivó el acuerdo 167-10/2013, en el cual se solicitó iniciar de forma oficiosa el procedimiento en Materia de Fiscalización en contra del Partido Acción Nacional, por la

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

comisión de conductas infractoras que constituyen presuntas violaciones a la normatividad electoral.

e) Notificación Personal. El 29 de abril del año en curso se le notifica al Licenciado Alejandro Colunga Luna, Representante Legal del Partido Acción Nacional, el oficio CEEPC/CPF/1088/2015, de fecha 22 de abril del año 2015, donde se le notifica el diverso acuerdo de fecha 16 de enero del presente año, en el cual el Pleno del Consejo acuerda iniciar de manera oficiosa el Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento, bajo el número de expediente PSMF-01/2015, en contra del Partido Político que representa, dándole a conocer a dicho representante el inicio del citado Procedimiento.

f) Recurso de Revisión. En desacuerdo con la anterior determinación basada en dicho acuerdo, el 05 de mayo del año que transcurre, el Licenciado Alejandro Colunga Luna, promovió Recurso de Revisión.

g) Remisión del Recurso de Revisión. Con fecha 11 de mayo de 2015, el Secretario Ejecutivo del consejo Estatal y de Participación Ciudadana, mediante oficio CEEPC/SE/1380/2015, remitió el Recurso de Revisión promovido por el Licenciado Alejandro Colunga Luna Martínez; asimismo, adjuntó informe circunstanciado y remitió la documentación concerniente al medio de impugnación interpuesto, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Justicia Electoral del Estado.

1.II. Admisión y cierre de instrucción del Recurso de Revisión. Con fecha 15 de mayo de 2015, y toda vez que el medio de impugnación que nos ocupa reunió los requisitos de Ley, este Tribunal Electoral admitió el Recurso de Revisión, como así lo dispone el artículo 35 de la Ley de Justicia Electoral, y al no existir diligencia alguna

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

pendiente de desahogo, se cerró la instrucción y se turnó al Magistrado relator para la elaboración del proyecto de resolución, como lo establece el artículo 53 de la citada Ley de Justicia Electoral.

1.III. Sesión Pública. Circulado a los Magistrados integrantes de este Tribunal Electoral el proyecto de resolución, con fecha 19 de mayo de 2015, se citó formalmente a las partes para la sesión pública a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, a celebrarse a las 10:00 horas del día 21 de mayo de 2015, para el dictado de la sentencia respectiva.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

Este Tribunal Electoral del Estado, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con el artículo 116 fracción IV inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 105 y 106 punto 3 de la LEGIPE; así como el Decreto 607 emitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, publicado el veintiséis de junio de dos mil catorce. Asimismo, son aplicables los artículos 30 tercer párrafo, 32 y 33 de la Constitución Política de San Luis Potosí; y los numerales 26, 27 fracción II, 28 fracción II, 30, 66 fracción II, 67 fracción II, 68 y 69 de la Ley de Justicia Electoral del Estado; preceptos normativos anteriores, de los que se desprende que este Tribunal Electoral es competente en esta Entidad Federativa para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales; asimismo, para garantizar la protección de los derechos político-electorales, resolviendo este Órgano Electoral en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas y de los ciudadanos, garantizando asimismo que los actos y resoluciones que se emitan en materia electoral, se ajusten invariablemente a los principios que rigen la función de la misma materia y de conformidad con la legislación aplicable.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, causales de improcedencia y sobreseimiento; presupuestos procesales y requisitos de procedibilidad.

El medio de impugnación que se analiza satisface los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 66 a 70 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, como se puntualiza en seguida:

a)Causales de improcedencia y sobreseimiento.

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Pleno del Tribunal Electoral, considera que no existe causal de improcedencia, ni de sobreseimiento de las que establecen respectivamente los artículos 36 y 37 de la Ley de Justicia Electoral del Estado.

b)Definitividad. En el caso se colmó dicho requisito, toda vez que lo que se impugna es un acto emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que no requiere que se haya agotado diversa instancia prevista, de conformidad con lo establecido en el arábigo 66 fracción II de la Ley de Justicia Electoral.

c)Oportunidad. El medio de impugnación fue promovido oportunamente, toda vez que el recurrente tuvo conocimiento del acto que reclama el 29 de abril del año en curso, e interpuso el Recurso de Revisión que nos ocupa el 05 de mayo siguiente, esto es, dentro del plazo legal de cuatro días hábiles, de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley de Justicia Electoral vigente en el Estado.

d) Legitimación. El representante de la parte actora, se encuentra legitimado para presentar el medio

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

de impugnación que nos ocupa, como así lo dispone el numeral 67 fracción I de la Ley de Justicia Electoral, en razón de que el Consejo Electoral, le reconoce tal carácter en el informe circunstanciado que remitió a este Tribunal Electoral con fecha de 11 de mayo del año en curso.

e) Interés jurídico. En el presente asunto, se encuentra demostrado que el Licenciado Alejandro Colunga Luna, tiene interés jurídico en su carácter de representante legal del Partido Acción Nacional, como así lo señalan los artículos 34 fracción I y 66 fracción II de la Ley de Justicia Electoral del Estado, en razón de que sus pretensiones son contrarias a las que estableció el Consejo Electoral.

f) Forma. El escrito de demanda reúne los requisitos formales que establece el artículo 35 de la mencionada Ley de Justicia Electoral del Estado, a saber: se hace constar el nombre del actor; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se sustenta la impugnación, así como los conceptos de agravios que el representante del partido político considera pertinentes para controvertir el acto emitido, por la autoridad responsable; además, de hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente.

g) Personería. El Licenciado Alejandro Colunga Luna, cuenta con personería para promover en el presente recurso, toda vez que así se la reconoce el Consejo Estatal en el informe circunstanciado que emitió a este Tribunal Electoral de fecha 11 de mayo del año en curso.

h) Tercero Interesado. El día 11 de mayo de 2015, mediante oficio CEEPC/SE/1380/2015, la Autoridad

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

Administrativa Electoral, presentó su informe circunstanciado, mediante el que informó entre otras cosas, que durante el término legal previsto por la Ley Electoral, no compareció al presente recurso, tercero interesado.

TERCERO. Agravios formulados por el promovente.

Los agravios expuestos por la parte actora, en el presente medio de impugnación, son del tenor siguiente:

“PRIMERO.- Genera lesión jurídica al Partido Acción Nacional el oficio CEEPC/CPF/1088/2015, ya que el mismo menciona que se inicia de manera oficiosa el Procedimiento Sancionador en Materia de financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, siendo que este auto de autoridad está mal fundado y motivado, al contradecir lo estipulado por la Ley Electoral del Estado vigente al mes de junio del 2011 en su artículo 315, PRESCRIBIENDO su facultad para sancionar lo imputado por la Responsable, numeral que para un mejor entendimiento me permito transcribir:

ARTICULO 315. Las denuncias en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, y de las agrupaciones políticas estatales, deberán ser presentadas ante el Consejo, el que dispondrá lo conducente a efecto de que sean turnadas a la Comisión Permanente de Fiscalización, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Las denuncias deberán presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se haya presentado el informe y comprobación que sobre el origen, uso y destino de los recursos del partido político, o de la agrupación política de que se trate, correspondiente al ejercicio durante el que presuntamente se hayan suscitado los hechos que se denuncian.

La ley enmarca la obligación de presentar en tiempo y forma cualquier denuncia en materia de financiamiento para los Partidos Políticos, el cual comprende un lapso de tres años a partir de que haya sido entregado el informe anual por parte del partido requerido; es por lo anterior que debemos remitirnos al Dictamen emitido por la Comisión permanente de Fiscalización, relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros presentados por los partidos políticos, el cual especifica las fechas en las cuales fueron entregados por el Partido Acción Nacional de manera trimestral, siendo los siguientes:

1er trimestre: 13 de octubre de 2011

2do trimestre: 20 de octubre de 2011

3er trimestre: 12 de diciembre de 2011

4to trimestre: 27 de enero de 2012

DECLARACIÓN PARIMONIAL: 30 de enero de 2012

De las fechas referidas, se puede determinar que el informe fue entregado ante el órgano competente el 30 de enero de 2012, fecha a partir de la cual empieza a correr el término señalado por el numeral 315 de la Ley Electoral del Estado, por lo que el derecho para iniciar el Procedimiento Sancionador en Materia de financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas,

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

PRESCRIBIÓ el día 30 de enero de 2015, siendo el caso que me fue notificado el inicio oficioso del procedimiento sancionador el 29 de abril de 2015, entendiéndolo esta como la primera comunicación relacionado con el procedimiento sancionador y donde pude conocer los trámites que al efecto realizó la responsable.

Al haber transcurrido en exceso el plazo de tres años para iniciar el procedimiento sancionador, resulta claro que le prescribió a la autoridad su facultad para hacerlo:

José Antonio Hoy Manzanilla

vs

Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 11/98

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIA.-

[...]

En ese sentido, el acuerdo impugnado es violatorio del principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Norma Suprema por que la autoridad pretende sancionar a mi representado fuera del plazo que la Ley otorga, lo cual no es legal ni correcto, si se considera que la notificación del inicio del procedimiento sancionador es la primera comunicación procesal donde se conoce denuncia y elementos en que se apoya la autoridad para su emisión.

Por lo que se solicita a este Tribunal que decrete la prescripción del Procedimiento Sancionador en Materia de financiamiento de Partido Políticos y Agrupaciones Políticas, por haber transcurrido en exceso el plazo marcado por la Ley Electoral del Estado vigente en el mes de junio de 2011 en su artículo 315, situación que es de estudio preferente al aplicar en el procedimiento sancionador electoral la presunción de inocencia.

SEGUNDO.- *Viola las garantías de seguridad jurídica de mi representado, contenidas en los artículos 16 y 17 del Pacto Federal, la iniciativa procesal que ha tenido la responsable desde que se denunciaron las supuestas irregularidades, hasta el inicio oficioso del Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, al haber pasado más de un año entre el primer y segundo acto, por lo que a continuación me permito señalar las fechas de los actos mencionados, las cuales pude conocer hasta que me fue notificado el inicio oficioso del procedimiento sancionador:*

- **3 de octubre de 2013:** *Se denuncia por parte de la C.P Claudia Marcela Ledesma González, encargada de despacho de la Unidad de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ante la H. Comisión Permanente de Fiscalización del mismo organismo, la probable existencia de inconsistencias detectadas al Partido Acción Nacional dentro del Dictamen de Gasto Ordinario del ejercicio 2011.*
- **7 de octubre de 2013:** *Se realiza el Acta de la Trigésima quinta sesión de la comisión permanente de fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, derivada de la cual se dicta el acuerdo 167-10/2013, en el cual se ordena el inicio oficioso del Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas al Partido Acción Nacional.*
- **29 de abril de 2015:** *Se emplaza a mi representada al Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas*

Por lo cual, se puede apreciar que entre el acuerdo 167-10/2013 en el cual se ordena se lleve a cabo el Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas en contra del Partido Acción Nacional, el cual fue dictado el 7 de octubre de 2013 y el emplazamiento realizado a mi representada el 29 de abril de 2015, transcurren poco más de dos

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

años, por lo que incurre dicha autoridad en una inactividad procesal por un tiempo mayor a un año, el cual establecido por criterio jurisprudencial conlleva sea decretada la caducidad de dicho procedimiento, permitiéndome transcribir a continuación el mismo:

Televimex, S.A de C.V

Vs

Consejo General del Instituto Electoral

Jurisprudencia

CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.-

[...]

Aunado a lo anterior, el hecho de que la notificación de 29 de abril de 2015 es la primera de la cual tengo conocimiento legal de lo reclamado por parte de la autoridad, con todos los elementos para identificar en qué constancias se apoya el acto para poderlo impugnar de manera correcta, al hacer del conocimiento personal del partido al que represento la determinación por parte de la H. Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, me encuentro en tiempo para combatir todas las actuaciones en las cuales descansa la misma, máxime que el suscrito jamás conocí la denuncia interpuesta por la C.P Claudia Marcela Ledesma González:

Partido Alianza Social

Vs

Primera Sala Unitaria del Tribunal Electoral

Del Estado de Michoacán.

Jurisprudencia

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.-

[...]

Es por lo anterior, que independientemente de la determinación a la que llegue este Tribunal respecto del primer agravio, en cuanto al estudio del segundo concepto señalado en el presente escrito, se deberá decretar la caducidad dentro del procedimiento, al haber pasado más de un año de inactividad procesal, toda vez que no hubo actuación alguna a partir de que se dictó el acuerdo donde se ordena el inicio oficioso del Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, hasta el emplazamiento del mismo.”

CUARTO. Los argumentos de inconformidad expuestos por el promovente, se sintetizan para su estudio de la manera siguiente.

1. Ausencia de fundamentación y motivación en el procedimiento sancionador que pretende iniciar la autoridad Administrativa, al contradecir el contenido del artículo 315 de la Ley Electoral, que describe la prescripción para sancionar en materia de fiscalización de los partidos políticos.

El numeral transcrito obliga a presentar en tiempo y forma cualquier denuncia, y en el caso comprende un lapso de 3 años a partir de la entrega del informe anual (sic) por parte del partido requerido.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

El último informe que entregó el Partido Acción Nacional fue en fecha 30 de enero de 2012, y es a partir de ello que empieza a correr el término de prescripción señalado en el numeral 315 de antecedentes.

Sin embargo, la notificación mediante la que se le comunica el inicio oficioso del procedimiento sancionador, fue realizada el 29 de abril de 2015, lo que evidencia el exceso de 3 años para iniciarlo y vulnera el principio de legalidad, toda vez que es a través de la notificación es donde se conoce la denuncia y los elementos en que se apoya la autoridad para el inicio del procedimiento sancionador.

2. Vulnera la garantía de seguridad jurídica la inactividad procesal de la autoridad responsable al transcurrir más de un año que comprende desde la denuncia de las supuestas irregularidades, hasta el inicio oficioso del procedimiento sancionador; de igual forma, entre el acuerdo dictado el 7 de octubre de 2013 y el emplazamiento del 29 de abril de 2015, transcurren poco más de 2 años de inactividad de la autoridad, razón por la cual conlleva que se decrete la caducidad de dicho procedimiento. Máxime que el actor no tuvo conocimiento de la denuncia interpuesta por la Unidad de Fiscalización.

QUINTO. Fijación de la litis.

Este Tribunal Electoral procede a efectuar el estudio jurídico de los agravios externados por la parte disidente, circunscribiéndose en su examen a los puntos sobre los que éste suscite la controversia expresa, en relación con las razones expuestas por la autoridad responsable y con las pruebas aportadas en el sumario.

En ese tenor, la relación de la litis planteada se constriñe en:

Determinar si opera la prescripción y/o la caducidad del inicio del procedimiento sancionador en materia de financiamiento, incoado al Partido Acción Nacional, por resultar excesivo el término para su instauración, ya que éste, partiendo de la base del emplazamiento subsecuente notificado al actor el 29 de abril de 2015, prescribe en tres años según lo dispone el artículo 315 de la Ley Electoral vigente en el año 2011.

SEXTO. Calificación de agravios.

Del resumen general del agravio anteriormente enunciado como **1** en la fijación de la litis, resulta fundado y suficiente para la pretensión de la parte actora, de conformidad a las consideraciones y fundamentos legales que en adelante se precisan.

Mientras que la inconformidad enumerada en la litis como **2** por este Tribunal Electoral, resulta de igual forma infundado atento a los argumentos que en adelante se vierten.

SÉPTIMO. Pretensión y causa de pedir.

La intención total del quejoso, es que opere la prescripción y/o caducidad respecto del procedimiento sancionador en materia de financiamiento que se pretende incoar al Partido Acción Nacional, sobre la base de que conforme a la Ley Electoral aplicable, operó la prescripción del término de 3 años establecidos para instaurar tal procedimiento en contra del Partido de referencia.

OCTAVO. Estudio de fondo.

Previo a dar respuesta a los agravios, es menester indicar que se analizará de inicio el reseñado en el numeral **2**, y posteriormente se entrará al estudio del enumerado **1**, sin que la alteración al orden en que fueron propuestos cause perjuicio al recurrente, toda vez que lo sustancial es que todos sea estudiados, sin que alguno quede libre de análisis.

Precisado lo anterior, por cuanto hace al agravio enumerado como **2** en la presente resolución, en relación a la vulneración de la garantía de seguridad jurídica la inactividad procesal de la autoridad responsable al transcurrir más de un año que comprende desde la denuncia de las supuestas irregularidades, hasta el inicio oficioso del procedimiento sancionador; razón por la cual conlleva que se decrete la caducidad de dicho procedimiento.

Al respecto, cabe precisar que la inconformidad planteada es infundada, toda vez que el actor parte de la premisa errónea de fijar,

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

para pretender la inactividad definitiva del inicio del procedimiento sancionador, citar la figura de la prescripción y de la caducidad en forma coetánea; esto es, pretende que por un lado opere la prescripción del procedimiento sancionador, mientras que por otro, refiere que en el presente asunto también se actualiza la caducidad del procedimiento.

Sin embargo, al respecto es viable señalar que lo anterior no puede suceder en la especie, en razón de que ambas figuras – prescripción y caducidad- no son coexistentes al ser diametralmente opuestas entre sí; ello es así en razón de que por cuanto hace a la caducidad, según la teoría general del proceso —siguiendo la exposición de José Ovalle Favela— establece que es la “extinción anticipada del proceso debido a la inactividad procesal de las dos partes, y en ocasiones, de una de ellas, durante un período amplio, si se encuentra paralizada la tramitación.” En este sentido, un postulado básico de la ciencia procesal es que caduca la instancia, prescribe la acción y precluye el derecho.

Por consiguiente, la caducidad opera cuando “no se ejercen esos actos dentro del plazo de vida o vigencia previsto al efecto en la ley”, que requiere la inacción del interesado, para que los juzgadores la declaren de oficio; situación que en la especie no ocurre, toda vez que atendiendo a los parámetros de antecedentes, la caducidad no es o fue declarada oficiosamente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Mientras que la prescripción, atendiendo a su término jurídico, supone un hecho negativo, una simple abstención que en el caso de las acciones consiste en no ejercitarlas, y para que pueda declararse se requiere que la haga valer en juicio a quien la misma aproveche, y que sólo puede analizarse cuando se hace valer por parte legítima; esto es, que la prescripción es considerada como una típica excepción, merced al tiempo transcurrido que señale la ley y la voluntad de que se declare ante los tribunales, por la parte en cuyo favor corre.

Sirve de sustento para hacer notar la diferencia entre los términos legales caducidad y prescripción, la **Jurisprudencia 11/98** que cita el mismo promovente, con el rubro:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

“CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”

En tal sentido, en el asunto que nos ocupa se parte del sustento legal precitado 315 de la Ley Electoral vigente al año 2011, y que a la vez activa el propio actor ante este Órgano Jurisdiccional, como lo requiere ese presupuesto 315, de donde es claro que señala el término prescriptivo para formular denuncias y en consiguiente, para instaurar el procedimiento sancionador en materia de fiscalización de los partidos políticos, toda vez que las actuaciones del procedimiento tienen un tiempo límite cuyo origen lo es a partir de 3 años siguientes a la fecha de presentación del informe y comprobación que sobre el origen, uso y destino de los recursos presente el partido político que corresponda.

De manera que, tal y como lo reconoce el actor, existe prescripción que opera en favor y en tal sentido, es que este Tribunal Electoral entrará al estudio de la prescripción solicitada; declarando por ende, que el diverso argumento del quejoso en torno a la caducidad resulta inatendible, por no ser ésta una figura jurídica que encuadre con los hechos que se exponen, ni es compatible con la autoridad que deba decretarla de oficio.

NOVENO. Precisado lo anterior, del análisis de la demanda se advierte que el quejoso, en esencia, se agravia de que el procedimiento sancionador de antecedentes ha prescrito al no encuadrar la fecha de la denuncia respectiva, con el inicio del procedimiento sancionador que acorde a la respectiva notificación, el partido tuvo conocimiento de él hasta el 29 de abril de 2015, lo que contraviene el artículo 315 de la Ley Electoral aplicable.

Bajo ese parámetro, es menester analizar el marco jurídico aplicable al caso concreto, para ese efecto se traen a relación las disposiciones siguientes:

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS**

*“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de*

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 14. *A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”*

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Artículo 36. *Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, y hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas postulados por aquellos; así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a diputados locales, y ayuntamientos.*

Artículo 37. *Con las prerrogativas y derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos con registro nacional o estatal tiene derecho a participar en los procesos electorales que se lleven a cabo en el Estado, siempre y cuando observen lo dispuesto por las leyes federales y locales en la materia.*

Para conservar el registro o inscripción que da acceso a las prerrogativas económicas en el Estado, los partidos políticos deberán obtener por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones locales, ya sea para la elección del Poder Ejecutivo, o Poder Legislativo, en el último proceso electoral.”

LEY ELECTORAL DEL ESTADO VIGENTE EN EL AÑO 2011

Artículo 315. *Las denuncias en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas estatales, deberán ser presentadas ante el consejo, el que dispondrá lo conducente a efecto de que sean turnadas a la Comisión Permanente de Fiscalización dentro de las veinticuatro horas siguientes.*

Las denuncias deberán presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se haya presentado el informe y comprobación que sobre el origen, uso y destino de los recursos del partido político, o de la agrupación política de que se trate, correspondiente al ejercicio durante el que presuntamente se hayan suscitado los hechos que se denuncian.”

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

Como resultado de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos legales transcritos, en lo sustancial se desprende que:

- En México, todas las personas gozan de sus derechos humanos, y su ejercicio no pueden suspenderse, salvo en los casos que la propia Constitución establece.
- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas e instituciones, en su protección más amplia.
- Todas las autoridades deben proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
- El Estado debe prevenir y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
- Nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
- Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática.
- Con las prerrogativas y derechos constitucionales, los partidos políticos tienen derecho a participar en los procesos electorales que se lleven a cabo en el Estado, siempre y cuando observen lo dispuesto por las leyes federales y locales en la materia.
- Para conservar el registro o inscripción que da acceso a las prerrogativas económicas en el Estado, los partidos políticos deberán obtener por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida.
- El financiamiento y gasto de los partidos políticos estatales, serán objeto de Fiscalización por el organismo interno competente del CEEPAC.
- Las denuncias deberán presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se haya presentado el informe y comprobación que sobre el origen, uso y destino de los recursos presente el partido político respectivo
- Lo anterior, correspondiente al ejercicio en que se hayan suscitado los hechos denunciados.

En tal sentido, es menester precisar en primer término que este Tribunal Electoral determina que son fundados los agravios del representante del Partido Político quejoso, tomando en consideración que el ejercicio de las facultades de la autoridad administrativa electoral para incoar y declarar procedente el procedimiento

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

administrativo que establece la citada Ley Electoral del Estado, en el presente asunto debe entenderse iniciado a partir de que el Partido Acción Nacional realizó el o los últimos movimientos respecto del informe que sobre sus gastos entregó a la Unidad de Fiscalización del CEEPAC, que conforme a las constancias de autos se tiene que fue el 30 de enero del año 2012, en que configuró su última actuación al entregar la declaración patrimonial que corresponde al Partido hoy recurrente.

De ahí es que, a partir del 31 de enero de 2012, es que empieza a fenecer el tiempo respecto de la existencia del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos, y para efecto de su subsistencia, era necesario que el organismo electoral administrativo actualizara, antes de que se consumara el plazo de prescripción -esto es antes del 30 de enero de 2015-, la formulación de la denuncia respectiva e incoar el procedimiento de referencia, pero preponderantemente expedir la debida notificación a efecto de que el partido emplazado tuviera conocimiento de la denuncia del inicio del procedimiento respectivo al correrle traslado con el escrito de denuncia y su anexos, tal como lo establece el artículo 317 de la Ley Electoral vigente al año 2011, lo anterior atento a la garantía de legalidad y de audiencia a que tiene derecho el partido actor.

Sin embargo lo anterior no ocurrió, dado que en la especie, según se desprende de las pruebas que integran el expediente del procedimiento que nos ocupa, se obtiene que si bien es cierto que la autoridad administrativa electoral tuvo conocimiento de diversas irregularidades cometidas por el partido político hoy actor, desde el 7 de octubre de 2013, pues así se demuestra a través del Acta de la Trigésima Quinta Sesión de la Comisión Permanente de Fiscalización, documento con valor probatorio pleno al tenor del numeral 40 fracción I inciso b), en relación con el diverso 42 de la Ley de Justicia Electoral, idóneo y eficaz para demostrar que en el punto 4 del precitado acuerdo se señala el análisis de las infracciones detectadas al Partido Político Acción Nacional, dentro del Dictamen de resultados que se obtuvo de la revisión a los informes financieros presentados, entre otros, por ese Partido Político durante el ejercicio 2011.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

Y de igual forma se tiene, que derivado de las inconsistencias detectadas de antecedentes, en la misma fecha 7 de octubre de 2013 en la misma Acta de la Trigésima Quinta en el cuarto punto del orden del día, se desprende que la C.P. Marcela Ledesma González puso a consideración del organismo electoral el inicio oficioso del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que se pretendía instaurar al Partido Acción Nacional, por la comisión de conductas infractoras que constituyen presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de recursos, de lo cual derivó el acuerdo número 167-10/2013.

Sin embargo, no obstante los anteriores acuerdos inmersos en el Acta de precedentes, en donde quedó en evidencia que esas supuestas irregularidades cometidas por el hoy actor fueron conocidas por la autoridad hoy responsable desde el 7 de octubre de 2013, como también así lo reconoce la propia Autoridad en su informe circunstanciado emitido a este Tribunal el 11 de mayo de 2015.

Pero lo cierto es que en el presente asunto, existe la diversa circunstancia de que, de esas probables inconsistencias detectadas al Partido Acción Nacional dentro del Dictamen del Gasto Ordinario del Ejercicio 2011, lo que se acredita en autos es que fue hasta el 29 de abril de este 2015, en que se dio a conocer al Partido Acción Nacional el procedimiento sancionador incoado en su contra, es decir, pasado más de tres años del término prescrito por la Ley Electoral, contados a partir de la entrega del informe correspondiente que hace el Partido Acción Nacional ante la Comisión de Fiscalización del CEEEPAC; lo que contraviene la norma legal en perjuicio del Partido Acción Nacional.

Al respecto, por su puntual aplicación es de conocimiento el criterio jurisprudencial elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹, que a la letra dice:

"Para que opere la excepción de prescripción no se requiere señalar pormenorizadamente las circunstancias en las que se funda, ya que tratándose de un fenómeno jurídico que actúa por disposición de la Ley y por el transcurso del tiempo, cuando se plantea en la contestación a la demanda respecto a los derechos ejer-

¹

Ejecutoria: Informe 1975, 2ª parte, 4ª Sala p.67. A.D. 665/75.U.Precedentes: A.D.311/72. septiembre de 1973.U. A.D. 5555/74.marzo de 1975.U.,

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

citados, se viene en conocimiento de la calidad de la defensa hecha valer por el demandado y lo único que deben demostrarse son los hechos que justifican el cómputo del término prescriptivo."

De ahí, es que se afirma que el tiempo para formalizar la denuncia, concretamente para instaurar el procedimiento sancionador se agotó en la fecha 30 de enero de 2015, lo que hace procedente la alegada prescripción, dado que fue hasta el 29 de abril de 2015 en donde legalmente se emplazó al Partido Acción Nacional al Procedimiento Sancionador, así se constata de la cédula de notificación personal, misma que adquiere pleno valor conforme lo dispone el artículo 40 fracción I inciso b), en correlación con el diverso 42 de la Ley Procesal Justicia Electoral, apta para demostrar que el Licenciado Alejandro Colunga Luna, firma que recibió en esa fecha la citada notificación del oficio CEEPC/CPF/1088/2015, mediante la que el consejo Electoral hace de su conocimiento el expediente PSMF-01/2015, relacionado con el acuerdo del 16 de enero de 2015, que determina iniciar oficiosamente el Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento a su representado Partido Acción Nacional.

De ahí es que, carece de sustento ese acuerdo del 16 de enero de 2015 relativo al expediente PSMF-01-2015 y notificado el 29 de abril del mismo año, toda vez que fueron actuaciones que no se llevaron a cabo de acuerdo a la citada legalidad, toda vez que no concurren plazos legales entre la entrega de los informes por parte del Partido Acción Nacional² y la notificación del inicio de procedimiento, donde se advierte que corrió tiempo en exceso, configurando la hipótesis de prescripción inmersa en el numeral 315 de la Ley Electoral, porque el inicio del procedimiento como tal, lo pretende instaurar la autoridad hasta el 29 de abril de 2015, en donde el Consejo Estatal emplaza legalmente al Partido Acción Nacional al Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento; sin embargo, para que la autoridad pueda iniciar un procedimiento administrativo de sanción en contra de algún Partido Po-

2

"1er trimestre, presentado el 13 de octubre de 2011. 2º trimestre presentado el 20 de octubre de 2011. 3er trimestre presentado el 12 de diciembre de 2011. 4º trimestre presentado el 27 de enero de 2012. Declaración patrimonial, el 30 de enero de 2012."

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

lítico, tal como lo regula la disposición invocada, lo que debe actualizar es el respectivo emplazamiento o la notificación, pues si no se notifica al afectado dentro de dicho plazo, las referidas facultades prescriben, en virtud de que lo que interrumpe la prescripción es la notificación del acto de inicio.

Por ende, esos antecedentes hacen patente que no quedaron firmes, ni la demanda, ni las observaciones emitidas en el dictamen en las conclusiones, así como la determinación por la que se ordenó el inicio del procedimiento sancionador respectivo, pues fueron aspectos que ahora se controvierten judicialmente y en donde acorde a las constancias de autos demuestra que estos empezaron a operar hasta el 29 de abril de 2015.

En ese sentido, la autoridad administrativa electoral parte de una errónea apreciación, al establecer que con los actos celebrados el 7 de octubre de 2013, relacionado con el acuerdo 167-10/2013, en el cual se pone a consideración la denuncia sobre el Procedimiento Sancionador en contra del Partido Acción Nacional, así como el diverso acuerdo del 16 de enero de 2015, relativo al expediente PSMF-01-2015 en donde se ordena el inicio oficioso del procedimiento sancionador y la notificación del 29 de abril de 2015, es suficiente para cubrir las formalidades que establece la Ley Electoral, para constituir e incoar el procedimiento sancionador en materia de financiamiento.

Sin embargo, lo anterior es inconsistente porque, al encontrarse reguladas por la ley las etapas que deben seguirse para el caso del inicio de un procedimiento administrativo, la temporalidad en cuanto a la notificación y conocimiento del fiscalizado se traduce en una condición indispensable para el ejercicio de la acción subsecuente que corresponda, de modo que si la denuncia y/o el conocimiento sobre el inicio del procedimiento que deba conocer el partido, no se plantea dentro del plazo legal, tal situación por sí misma prescribe la conducta atinente en el artículo 315 de la Ley Electoral vigente en el año 2011. Lo anterior, sin prejuzgar este Tribunal Electoral respecto de la veracidad o no de las conductas imputadas al Partido recurrente y, mucho menos, sobre la base de encontrarse acreditada responsabilidad alguna que

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

diere lugar a ordenar el inicio del procedimiento sancionador en materia de fiscalización.

Por ende, es inconcuso que hasta este momento la autoridad administrativa pretenda dar el cumplimiento al que estaba obligado a realizar hasta antes del 30 de enero de 2015, de conformidad con los lineamientos establecidos en la ley de la materia y al no cubrirse esas formalidades que establece la Ley Electoral constituye y entraña una violación en perjuicio del promovente; máxime que la extemporaneidad de los actos fiscalizadores a cargo de los órganos del Consejo Estatal no son actos imputables al Partido hoy recurrente, ni fue consecuencia directa de una actitud asumida por el presunto infractor, toda vez que éste entregó en tiempo los informes que le correspondían al ejercicio fiscal 2011 y por ende, el impulso procedimental correspondía principalmente al órgano competente CEEPAC.

En ese orden de ideas, este Tribunal Electoral da paso al estudio de la notificación de fecha 29 de abril de 2015 que argumenta el promovente, donde se le comunica el inicio oficioso del procedimiento sancionador, vulnera el principio de legalidad por haber excedido el tiempo para el inicio del procedimiento, ya que es a través de la respectiva notificación, donde a su representado se le da a conocer la denuncia y los elementos en que se apoya la autoridad para el inicio del procedimiento sancionador.

Agravio el anterior que resulta fundado, en razón de que tanto las autoridades administrativas electorales, como las jurisdiccionales tienen el deber de verificar que todos los actos y resoluciones en materia electoral se ajusten al principio de legalidad y certeza, así como de acatar la condición de reunir los debidos presupuestos procesales y que su actuar se ajuste al marco de legalidad con estrecha vinculación a los derechos humanos, con la finalidad de dotar de legalidad los diversos actos que desarrolla debido a su actuar como Órgano Electoral, entre ellos, las de **la debida notificación en materia electoral**, toda vez que ésta adquiere suma relevancia dentro del proceso al representar el inicio de cualquier acto de molestia, porque indiscutiblemente las notificaciones *“son las actuaciones judiciales*

tendientes a hacer del conocimiento de las partes una determinada resolución dictada en un juicio o recurso electoral.”³

Así pues, en relación a cualquier acto de molestia, precisamente debe respetarse en todo momento los derechos humanos reconocidos en el propio ordenamiento constitucional y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, mismos derechos humanos que brindan protección a todas las personas, incluyendo las morales o jurídicas, siempre que para éstas, tales derechos resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad, como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el pasado veintiuno de abril de dos mil catorce, la contradicción de tesis 360/2013.

En el caso de los Partidos Políticos, dichas entidades democráticas gozan de los derechos humanos de audiencia, de defensa y de legalidad, éste último derecho también llamado como garantía judicial en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", al establecer en su artículo 8, párrafo 1 que: ***“Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable”***; en relación a ese mismo derecho humano el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 párrafo 1, señala que: ***“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”***..., encontrando aplicación los anteriores derechos humanos en nuestro país, atento a lo dispuesto por el artículo 1º de la Carta Magna Federal, toda vez que el Estado Mexicano ratificó en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, ambos pactos internacionales a los cuales se ha hecho referencia anterior.

3

DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Derecho Procesal Electoral Mexicano. 2da edición, México 2006. Pág. 50.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

En relación a los Derechos Humanos a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es coincidente con el fondo de los mismos al señalar en su artículo 14 que: *“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”*

De todos los derechos fundamentales citados anteriormente, se desprende la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista un debido proceso y no se cumplan las formalidades que al respecto establece la ley aplicable o cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, la presunción de inocencia en tanto que su reconocimiento favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales⁴.

En este cumplimiento a los derechos humanos anteriormente enunciados y a las formalidades exigidas por la ley, la notificación es una formalidad legal en que se comunica a los interesados una resolución de carácter administrativo o judicial; en lo que interesa, es un medio legal por el que se da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de una resolución judicial.⁵

En consecuencia, la notificación es un acto de hacer conocido,

4

Sirve de sustento por analogía al anterior argumento, el criterio emitido en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 6, número 13, 2013, páginas 59 y 60, con el rubro y texto: **“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.”**

5

Véase <http://www.guerrero.gob.mx/p= readart&art. Order=ReadArt. &. Article=301#N>.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

poner en conocimiento o hacer conocer algo. Se asume que todas tienen un propósito que es precisamente el cumplir con formalidades legales establecidas para una notificación, cuyo marco son los principios fundamentales del Derecho Procesal y los principios del procedimiento, que los primeros son **la necesidad de oír al demandado** y la igualdad de las partes; mientras que los segundos, son tendentes a dar a conocer las actuaciones realizadas en el proceso por el funcionario judicial, **con la finalidad de que una parte tenga la oportunidad de oponerse a un acto** realizado a instancia de la contraparte a fin de verificar su regularidad.

Una vez establecida la importancia de la notificación, como acto iniciador de un procedimiento legal, enfocándonos al caso particular que nos ocupa, de las constancias que existen en autos se advierte que con fecha 29 de abril de 2015, el notificador del CEEPAC, presentó ante el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante legal la Cédula de Notificación Personal, al que acompañó el oficio CEEPC/CPF/1088/2015, dirigido al representante del Partido de referencia, Licenciado Alejandro Colunga Luna, mediante la cual hace del conocimiento de dicho representante el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, respecto del inicio oficioso del Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, incoado al Partido Acción Nacional, por el incumplimiento de diversas obligaciones contenidas en la Ley Electoral, relativas al gasto ordinario 2011.

Por su parte, a fin de soportar la legalidad del inicio del procedimiento sancionador en materia de financiamiento, así como que el Partido Acción Nacional tuvo conocimiento de este acto, la Autoridad Administrativa Electoral, en su informe circunstanciado de fecha 11 de mayo de 2015, señala en lo conducente, que durante la sesión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el 16 de enero de 2015, durante el desahogo del orden del día, se resolvió lo siguiente:

“...por unanimidad de votos se acordó iniciar oficiosamente el

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, en contra del Partido Político acción Nacional por el incumplimiento de [...] quedando registrado el inicio de dicho procedimiento bajo el número PSMF-01/2015.”

En virtud de lo anterior, la responsable sostiene que estuvo presente en la citada sesión de fecha 16 de enero del 2015, el Licenciado Huitzimengari Herrera Romero, tal como se acredita con la lista de asistencia que fue tomada en dicha sesión; por tanto, desde esa fecha el Partido Político tuvo conocimiento del inicio del procedimiento sancionador, sin que hubiere sido impugnada tal determinación dentro del plazo legal, adquiriendo por tanto firmeza y eficacia legal.

Ahora bien, una vez analizado el argumento de la responsable para sostener la legalidad de la notificación, se advierte ausencia legal en los argumentos que expone en relación a los hechos probados que se advierten de las constancias que obran en autos, ya que la autoridad administrativa electoral en su informe pretende sostener que el partido hoy recurrente fue debidamente notificado del inicio del procedimiento sancionador al encontrarse presente su representante legal en la sesión pública en la que se dirimió el punto que nos ocupa.

Sin embargo, de los hechos probados se tiene que del Acta de la Sesión de fecha 16 de enero de 2015(f. 65 de autos), no se puede deducir claramente la firma del Licenciado Huitzimengari Herrera Romero, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, al no existir certeza plena de cuál de todas las firmas estampadas corresponde al representante del Partido Acción Nacional; de ahí es que, al documento de referencia este Tribunal Electoral no puede otorgarle el valor probatorio alguno para acreditar a través de dicho instrumento documental, que el representante del Partido Acción Nacional se encontrara en esa sesión y que por consecuencia tuviera conocimiento del asunto relacionado que dio paso al registro del inicio del procedimiento sancionador PSMF-01/2015 que nos ocupa.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

Máxime que existe la diversa circunstancia que aduce el actor y lo constata este Tribunal Electoral en las constancias de autos, no se le notificó a su representado Acción Nacional sobre la denuncia configurada en contra de éste; esto es, no existe cédula alguna para efecto de demostrar que fue notificada ante el partido hoy recurrente, la denuncia que el CEEPAC configuró y fue base para el inicio oficioso del procedimiento sancionador, vulnerando con ello lo establecido el principio de legalidad y coherencia que debe permear en todos los actos emanados de las Autoridades, en este caso Administrativa Electoral.

En tal sentido, no se acredita en el gobernado el conocimiento fehaciente de tal situación, ya sea por disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro medio suficiente y oportuno. Ni tampoco se demuestra que se le dio el derecho de fijar su posición sobre esa denuncia y el derecho de que se trate, ni la posibilidad de que dicha institución política aportara los medios de prueba conducentes en beneficio de sus intereses; vulnerando con ello el principio de legalidad.

Es así que, retomando el tema del Acta de la Sesión de fecha 16 de enero de 2015, cabe agregar que al haberse tratado el asunto del inicio del procedimiento sancionador en una sesión de la cual no se levanta el acta en forma inmediata, sino que se firma hasta la sesión siguiente, en términos de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 en relación con la fracción IX del artículo 9, en correlación con el diverso 13 fracciones VI y VII del Reglamento de Sesiones de los Organismos Electorales, en consecuencia tampoco existe la certeza de que en caso de que hubiera asistido a la sesión del 16 dieciséis de enero de 2015 dos mil quince, el representante del partido político Licenciado Huitzimengari Herrera Romero, le hubieren entregado el acta en ese momento y por ende, menos existe la certeza que dicho representante haya tenido a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del contenido del acto o de la resolución; así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

emisión; razones por las que, este Tribunal Electoral determina que no es posible sostener que esa “notificación” del 16 de enero de 2015 relacionada con el inicio de procedimiento sancionador en materia de financiamiento, se hubiere tenido por legalmente válida a favor del hoy recurrente, de conformidad al artículo 50 de la Ley de Justicia Electoral.

Sirve de criterio orientador, la Jurisprudencia de la Tercera Época, 19/2001, con el rubro y texto:

“NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. Tanto en la legislación electoral federal como en la mayoría de las legislaciones electorales estatales existe el precepto que establece que, el partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió se entenderá notificado automáticamente del acto o resolución correspondiente, para todos los efectos legales. Sin embargo, si se parte de la base de que notificar implica hacer del conocimiento el acto o resolución, emitidos por una autoridad, a un destinatario, es patente que no basta la sola presencia del representante del partido para que se produzca tal clase de notificación, sino que para que ésta se dé es necesario que, además de la presencia indicada, esté constatado fehacientemente, que durante la sesión se generó el acto o dictó la resolución correspondiente y que, en razón del material adjunto a la convocatoria o al tratarse el asunto en la sesión o por alguna otra causa, dicho representante tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del contenido del acto o de la resolución, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión⁶, pues sólo así el partido político estará en aptitud de decidir libremente, si aprovecha los beneficios que le reporta el acto o resolución notificados, si admite los perjuicios que le causen o, en su caso, si hace valer los medios de impugnación que la ley le confiere para impedir o contrarrestar esos perjuicios, con lo cual queda colmada la finalidad perseguida con la práctica de una notificación.

Juicio de Revisión Constitucional Electoral. [SUP-JRC-057/2001](#). Partido del Trabajo. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos. La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil uno, aprobó por

6

Nota. Subrayado por el Magistrado Ponente.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.”

De la cita Jurisprudencia, se advierte que no por el simple hecho que se encuentre en una sesión una persona, se puede tener por legalmente perfeccionada una notificación personal para ella, pues es menester que esté constatado fehacientemente que, durante la sesión que se generó el acto o se dictó la resolución correspondiente dicho representante tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del contenido del acto o de la resolución, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión; situación que en el caso particular no se acreditó por parte del Organismo Electoral, sobre todo al ser un hecho público y notorio para este Tribunal que el acta de una sesión es firmada por Consejeros integrantes del Organismo Electoral y los representantes de los Partidos Políticos hasta la sesión siguiente, por lo tanto no pudo haberse entregado en ese momento el Acta de la Sesión celebrada, ese mismo día al representante del Partido Acción Nacional.

De conformidad a todo lo expuesto, es por lo que este Tribunal Electoral sostiene lo fundado del agravio **1** expuesto por el recurrente, en el sentido de que efectivamente **no existe soporte legal que demuestre** la legalidad de que:

- La denuncia formulada en contra del Partido Acción Nacional fue notificada en tiempo y forma por la autoridad hoy responsable.
- Tampoco se demuestra que el inicio de procedimiento sancionador fue instaurado en el tiempo y la forma establecida por la Ley aplicable.
- De igual forma no se acredita que los efectos legales a las anteriores actuaciones puedan reflejarse en la notificación respectiva, toda vez que ésta no puede surtir eficacia jurídica ante hechos que no fueron concretados dentro del plazo legal; esto es así porque en este asunto no se acredita que admitida la denuncia y dentro del término legal establecido, la Comisión Permanente de Fiscalización notifique al partido o agrupación política denunciada del inicio del procedimiento respectivo, corriéndole traslado con el escrito de la denuncia y sus anexos, sobre el inicio del desarrollo del procedimiento administrativo en materia de financiamiento.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

Aunado a lo anterior, por encontrarnos ante el inicio de un proceso sancionador en materia de financiamiento incoado al Partido Acción Nacional, la posibilidad del ejercicio de la facultad sancionadora con la cual cuenta la autoridad electoral, actualiza su obligación de respetar, tanto la normatividad aplicable al caso, como la garantía de audiencia de este instituto político, toda vez que surge al tener que analizar los informes y la documentación presentada con ellos, y la autoridad considere que existe alguna irregularidad en el pretendido cumplimiento de la obligación. Situación que en la especie no aconteció, toda vez que el actor en primer término no tuvo conocimiento de la denuncia; mientras que del procedimiento sancionador conoció de él hasta el 29 de abril de 2015, fecha en que ya había operado la prescripción.

Al respecto, resulta relevante hacer alusión a la tesis con clave de control S3EL 026/98, visible a fojas 32 y 33 de la Revista Justicia Electoral, suplemento número 2, año 1998, órgano de difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA GARANTIA DE, EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTICULO 49-A, PARRAFO 2, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.”

De ahí es que resulta fundado el agravio 1, en beneficio del partido actor Acción Nacional.

DÉCIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA.

Toda vez que en el presente asunto quedó acreditado que transcurrió con exceso el plazo prescriptivo establecido en la norma legal 315 de la Ley Electoral de 2011, este Tribunal Electoral deja sin efectos el acuerdo emitido el 22 de abril de 2015, relativo al expediente PSMF-01/20015, y por ende, prescrito el Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento que se pretendía incoar al Partido Acción Nacio-

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

nal; así como todas las consecuencias legales y fácticas que deriven del mismo.

ONCEAVO. Publicidad de la Resolución.

Por último, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3º fracciones XIII, XIV y XV, 41 fracción IV; y, por analogía el artículo 23 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia que se pronuncie en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se comunica a las partes el derecho que les asiste para manifestar, dentro del término de 3 tres días contados a partir de la notificación de la presente resolución, su conformidad o inconformidad en que sus datos personales señalados en el artículo 3º fracción XI de la Ley en cita, se incluyan en la publicación, en el sentido de que la falta de oposición expresa hará presumir su consentimiento en ello; lo anterior, sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 5º, 12 fracción I, 56, 57, 58, 59, 68 y 69 de la Ley de Justicia Electoral, se resuelve:

PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado, es competente para conocer y resolver el presente Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento de los Partidos Políticos.

SEGUNDO. La legitimidad del promovente Alejandro Colunga Luna, para promover el presente medio de impugnación se encuentra acreditada.

TERCERO. Son fundados los motivos de inconformidad esgrimidos por el representante del partido actor, en los términos expuestos en la parte considerativa octava y novena de la presente

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/47/2015

resolución; en consecuencia:

CUARTO. Se deja sin efectos el acuerdo emitido el 22 de abril de 2015, relativo al expediente PSMF-01/20015, y por ende, prescrito el Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento que se pretendía incoar al Partido Acción Nacional, así como todas las consecuencias legales y fácticas que deriven del mismo.

QUINTO. A fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, una vez que cause estado la presente resolución, publicítese y póngase a disposición del público general, de conformidad a los fundamentos y argumentos establecidos en el considerando décimo de esta resolución. Asimismo, se comunica a las partes el derecho que les asiste para manifestar, dentro del término de 3 tres días contados a partir de la notificación de la presente resolución, su conformidad o inconformidad en que sus datos personales señalados en el artículo 3º fracción XI de la Ley en cita, se incluyan en la publicación, en el sentido de que la falta de oposición expresa hará presumir su consentimiento en ello.

SEXTO. Notifíquese personalmente al quejoso Partido Acción Nacional, a través de su representante legal, y mediante oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Comuníquese y cúmplase.

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman **los Magistrados** que integran el Tribunal Electoral del Estado, **Licenciado Rigoberto Garza de Lira, Licenciada Yolanda Pedroza Reyes y Licenciado Oskar Kalixto Sánchez,** siendo ponente el tercero de los nombrados, quienes actúan con Secretario General de Acuerdos que autoriza, Licenciado Joel Valentín Jiménez Almanza, y Secretaria de Estudio y Cuenta Licenciada María Concepción Castro Martínez. Doy fe. **Rúbricas.**